

el marco de la educación y la cultura, el régimen manifestó un interés sobresaliente por incrementar los recursos de las instituciones de enseñanza superior. Así, el subsidio federal otorgado a las universidades ascendió a 25,607 millones de pesos en el sexenio. Baste decir que en el último año se destinaron a ese fin 8,500 millones de pesos, cifra que equivale a todo lo erogado por ese concepto en los 25 años anteriores.

Como contrapartida, el gobierno procuró un sutil control de las universidades, a través de la infiltración, y el mismo Presidente censuró reiteradamente la actividad política en el seno de esos centros de estudio.

## EN BUSCA DE LOS ESTUDIANTES

A la vez, Echeverría procuró un acercamiento con los estudiantes, interés evidente en él desde su campaña presidencial. Se trataba de superar el divorcio provocado en 1968. Y sostuvo repetidos diálogos con universitarios, así se tratara de grupos oficialistas. La culminación de sus esfuerzos sería la entrada a la UNAM. A ella acudió el 14 de marzo de 1975, para inaugurar el año escolar, hazaña que culminó, sin que el diálogo fuera posible, con aquella pedrada en la frente. Y aunque después de esto el Presidente aseguró que volvería el año siguiente, no lo hizo.

En lo educativo, el mayor logro del sexenio fueron los libros de texto. Modernos, con un sentido histórico adecua-

do, no por nada fueron censurados por las fuerzas represivas.

Contradictoria fue, por otra parte, la actitud del régimen frente a los medios electrónicos de comunicación, concretamente la televisión. De un lado, abundaron los ataques verbales por parte del mismo Presidente y de sus colaboradores; por otro lado, se le otorgaron todo género de estímulos y se permitió su fortalecimiento al constituirse —con la fusión de las dos empresas comerciales existentes— en un monopolio, impune y permanente violador de las leyes de la materia.

Este tipo de contradicciones entre el decir y el hacer aparecieron como una constante en la actitud del régimen y son motivos de las más enconadas críticas, sobre todo por parte de la iniciativa privada en lo referente a la política económica (cuyo análisis será objeto de otro trabajo periodístico que ofrecerá **Proceso**).

Otras contradicciones notables fueron: la postura del régimen frente al problema de la explosión demográfica, sus declaraciones sobre el endeudamiento externo que había que frenar y que a la postre llega a 22,000 millones de dólares; la lucha verbal contra las empresas transnacionales, que a final del sexenio son más poderosas que nunca, con inversiones por un monto de 5,000 millones de dólares; la prohibición de manifestaciones públicas luego de los enunciados de la apertura democrática; la proposición de vender empresas estatales no fundamentales al sector privado, seguida de una determinación tajante en

contrario y, de manera muy especial, las declaraciones sobre la firmeza del peso mexicano, reiteradas, frecuentes, para luego tomar la determinación de abandonar el tipo de cambio, la virtual devaluación de nuestra moneda.

En última instancia —al margen de los juicios personales, como el del presidente honorario de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, José Luis Robles Gleen, que sentencia que “el balance del régimen es negativo”—, son las mejoras sociales y económicas de la población las que determinan la eficacia o ineficacia de un gobierno. Estos son algunos indicadores de la situación, cuando el régimen de Luis Echeverría toca a su fin:

Cerca del 50 por ciento de la población económicamente activa forma parte del núcleo de desocupados o subempleados; es decir, algo menos que ocho millones de personas. Más de 30 millones de mexicanos carecen de atención médica. Sólo siete millones de habitantes, de los 60 que hay en el país, disfrutan de alimentación y nutrición suficientes. Hay un déficit de tres millones de viviendas. El analfabetismo afecta alrededor de 20 por ciento de la población total y a 40 por ciento de la rural. Más del 70 por ciento de la población económicamente activa recibe menos del 30 por ciento del ingreso nacional. Un 27 por ciento de los habitantes captan entre el 15 y el 20 por ciento del ingreso total. Y una pequeña élite, que representa apenas el tres por ciento de la población, acapara entre el 50 y el 60 por ciento del ingreso nacional. 

